

alega. Visto el pedimento del C. Promotor, fundado en la causa que original solicitó y obra en el expediente; la sentencia del inferior otorgando el amparo, y todo lo demás que de autos consta y se tuvo presente.

Considerando: que ha estado espedido el C. Cristobal Farfán, como Prefecto Suplente, para juzgar de la causa en que se escusó legalmente el Prefecto nato, sin considerarse por esto como Juez especial.

Considerando: que según las circunstancias que obran en la causa, resulta que no es cierto que al acusado no se le probara el delito por el que ha sido juzgado, como se refiere en el ocurso de amparo, y que en consecuencia, no aparece que con el procedimiento se haya violado alguna garantía de las que no están suspensas por la ley general de saltadores y plagiarios.

Con fundamento de los arts. 101 y 102 de la Constitución y ley de 20 de Enero de 1869, se decreta: que es de revocarse y se revoca la sentencia que pronunció el C. Juez de Distrito de Tlaxcala amparando al quejoso, y se declara: que la Justicia de la Unión no ampara ni protege á Justino Aguilar, contra los actos de que se queja.

Devuélvanse estas actuaciones al Juzgado de su origen, acompañándole testimonio de esta sentencia para los efectos consiguientes, archivándose á su vez el Toca.

Así por unanimidad de votos lo decretaron los CC. Presidente y Magistrados que formaron el Tribunal pleno de la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, y firmaron.—*José María Iglesias.*—*Juan J. de la Garza.*—*José María Arteaga.*—*Ignacio Ramírez.*—*M. Castañeda y Nájera.*—*Ignacio Altamirano.*—*Simón Guzmán.*—*Luis Velasquez.*—*M. Zavala.*—*José García Ramírez.*—*Miguel Auza.*—*Luis Aguilar*, secretario.

Es copia que certifico. México, Setiembre de 1874.—*E. Landa.*

AMPARO

Promovido ante el Juzgado de Distrito de Guanajuato por el C. Juan Rodríguez á favor de sus hermanos Luz, Salvador y Leonides del mismo apellido, contra los procedimientos del Gefe político de Dolores Hidalgo, que con violación de garantías, los redujo á prisión.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez de Distrito:

El Gefe de Hacienda en ejercicio de la promotoría fiscal, dice: En el recurso de amparo promovido por el C. Juan Rodríguez á nombre de sus hermanos Leonides y Salvador del mismo apellido, contra los procedimientos del Gefe político de Dolores Hidalgo, el Juzgado de su digno cargo pidió el informe con justificación á la autoridad política del citado partido de Hidalgo, y aunque lo rindió en el término de la ley, no fué con los requisitos que se le previno. No obstante de dicho informe, que si bien fué cierto que Salvador y Luz Rodríguez fueron aprehendidos por sospechas de complicidad en un asalto dado al rancho de la Graya la noche del 23 de Noviembre de 1873, también lo es, que se les puso en libertad tan luego como se sinceraron de la responsabilidad que se les atribuía, por lo que al respecto de estos individuos, ya no hay mérito para el amparo, supuesto que no hay sobre que recaiga, por lo que el que suscribe escusa alegar, á reserva de que conste de autos la soltura de Luz y Salvador Rodríguez.

Por lo que respecta á Leonides, también Rodríguez, ya el Ministerio fiscal en 13 de Diciembre del año próximo pasado, manifestó: que de las constancias que obran en las actuaciones, no era posible determinar si se habían violado las garantías individuales que invocó el quejoso, y que hoy solo podrían aducirse en favor de Leonides; mas

como hasta la fecha no hayan exhibido mejores datos que los que arrojaba el juicio en aquella fecha, ni Rodríguez haya rendido las pruebas que pudo y que por equidad espresamente se le pidieron espirado ya el término de la dilacion probatoria, así como tampoco el alegato, no obstante que para que no quedara indefenso, se sirvió disponer el Juzgado en auto de 21 de Febrero, que se mandara tener á la vista en la Secretaría en el Juzgado 1º popular de Hidalgo, por seis días, los autos respectivos; el que suscribe cree por lo expuesto, así como también porque en 2 del que finó dijo Rodríguez al notificárle el auto del día 21, que no podía rendir pruebas por que le faltaban indicios para ello, ni tampoco alegar por la misma causa, no obstante que el Juzgado les proporcionaba los medios de adquirir dichas pruebas, y de que había ofrecido rendirlas en el escrito de queja; cree repite, que en la persona de Leonides Rodríguez no se ha violado la garantía que otorga la Constitucion general en los artículos 16 y 20, y que por lo mismo el Juzgado de su digno cargo debe negar el amparo que solicita en favor de Leonides Juan y Rodríguez.

Guanajuato, Marzo 31 de 1874.—*José Severiano P. de Leon.*

Sentencia del C. Juez de Distrito.

Guanajuato, Julio 31 de 1874.—Visto este juicio de amparo iniciado por el C. Juan Rodríguez, ante el Juzgado de letras de Allende, en representación de sus hermanos Luz, Leonides y Salvador del mismo apellido, contra la Gefatura política de Hidalgo, por haberlos aprehendido y conducido á la cárcel con motivo de una averiguacion practicada de asalto, procedimiento que en opinion del quejoso viola los artículos 16 y 20 del Código Constitucional. Visto el informe rendido; las pruebas recibidas al fin y el pedimento fiscal. Resultando: que a noche del 24 de Noviembre próximo pa-

sado, el C. Gefe político personalmente fué á aprehender á Leonides Rodríguez, porque estaba acusado este de andar con una gavilla que la noche anterior habia asaltado el rancho de la Gruya, y en efecto aprehendió en Reoyos, por dicha razon, á Luz y Salvador Rodríguez, y á Dolores García, por falsedad en los informes dados al mismo C. Gefe sobre el paradero de Leonides; y conducidos los cuatro á Hidalgo, á los tres primeros, practicadas las primeras diligencias del sumario, se les excarceló, motivándose al último de los encausados el auto de formal prision dentro del término de la ley, lo mismo que á aquellos el de libertad.

Considerando: que el C. Gefe político en persona hizo la aprehension, segun expresa el informe de fojas 7, circunstancia importante al caso, en que va de acuerdo el escrito de demanda (fojas 1º); y siendo que la Gefatura de Hidalgo por ley general y particular, es autoridad competente para la aprehension de los criminales, sobre todo si estos están complicados en asalto, negocio en que ella es tambien el Juez; son absurdas por tanto las pretensiones del quejoso para que el C. Gefe les mostrase á sus hermanos la Orden ¿de quien? sobre un acto en que la Gefatura, de nadie tenía que recibir órdenes y que ejecutó en esa vez personalmente por su propio derecho y en cumplimiento de sus mas inmediatos deberes.

Considerando: que el artículo 20 de la Constitucion no ha sido violado, puesto que oportunamente se motivó á uno su prision y á los otros su libertad, ascito contenido en el informe (fojas 7) que no ha desmentido el agraviado, no obstante que original tuvo el expediente á la vista y que el Juzgado le recibió pruebas aun despues de la citacion para sentencia, las cuales si á algo conducen, es á poner fuera de duda la temeraria ligereza con que se intentó el recurso de amparo, mas bien que á justificar el ataque á las garantías individuales de que hablan las fracciones 1º y 2º del artículo 20 citado.

Por estas razones y de conformidad con lo pedido por el Ministerio público, este Juzgado fallar: Que la Justicia de la Union no ampara ni protege al C. Juan Rodriguez en el juicio que ha seguido en representacion de sus hermanos Luz, Salvador y Leonides del mismo apellido, contra la aprehension que de ellos hizo la Gefatura de Hidalgo, encausando ademas á este último. Notifíquese este fallo á las partes, publíquese en el periódico oficial del Estado y previa citacion, elévense estos autos para su revision á la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos. El C. Juez 1º suplente de Distrito, lo decretó y firmó. Doy fé.—*Indalecio Ojeda.*—*Luis G. Medina.*

Es copia que certifico. Guanajuato, 6 de Agosto de 1874.—*Luis G. Medina.*

Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.

México, Setiembre 2 de 1874.—Visto el recurso de amparo promovido ante el juzgado de Distrito de Guanajuato, por Juan Rodriguez á favor de sus hermanos Luz, Salvador y Leonides del mismo apellido, contra los procedimientos del Gefe político de Hidalgo, que con violacion de las garantías consignadas en los artículos 16 y 20, fracciones 1ª, 2ª y 3ª, redujo á prision á sus referidos hermanos, sin proceder orden escrita fundando y motivando el procedimiento, no les hizo saber la causa de este y el nombre del acusador, y omitió tomarles declaracion preparatoria en tiempo habil para actuar y carearlos con los testigos que hubiesen depuesto en su contra. Visto el informe de la autoridad; el parecer fiscal; lo alegado por el quejoso con cuanto mas se tuvo presente y ver convino.

Considerando: que segun aparece de las constancias de autos, el Gefe político en persona sin asentar por escrito orden motivada de prision, procedió á aprehender á

Leonides Rodriguez que estaba acusado de formar parte de una gavilla de bandidos que habian asaltado el rancho de la Graya y á los hermanos de aquel, Luz y Salvador, por haber dado falsos informes á la autoridad; y que á estos dos últimos se les puso en libertad poco tiempo despues de su aprehension, dictándose dentro del término legal auto motivado de prision contra el primero.

Considerando: que si bien el Gefe político debio haber asentado por escrito la orden motivada de prision, en cumplimiento de lo prevenido en el artículo 16 constitucional, esa irregularidad queda subsanada poniendo en libertad á Luz y Salvador Rodriguez y dictando auto motivado de prision contra Leonides.

Considerando: que no está justificada la violacion de las garantías que consigna el artículo 20 de la Constitucion en sus fracciones 1ª, 2ª y 3ª.

Con fundamento de los artículos 101 y 102 de la Constitucion federal, se decreta: que es de confirmarse y se confirma la sentencia pronunciada por el Juez de Distrito de Guanajuato en 31 de Julio del presente año, que declara: que la Justicia de la Union no ampara ni protege á Luz, Salvador y Leonides Rodriguez, contra los procedimientos que han dado origen al presente recurso.

Devuélvase los autos al Juzgado de su origen, con copia certificada de esta sentencia; publíquese y archívese á su vez el Tomo.

Así por unanimidad de votos lo decretaron los CC. Presidente y Ministros que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, y firmaron.—*José M. Iglesias.*—*M. Auza.*—*Juan J. de la Garza.*—*Ignacio Ramirez.*—*M. de Castañeda y Nájera.*—*Ignacio M. Altamirano.*—*S. Guzman.*—*M. Zuvala.*—*José García Ramirez.*—*Luis María Aguilar*, secretario.

Es copia que certifico. México, Octubre

9 de 1874.—*Lic. Enrique Landa*, oficial mayor.

AMPARO

Promovido ante el Juzgado de Distrito de Veracruz por Eusebio Pacheco, Blas Milan, Severo Indalecio, Luz Mereles y Marcelo Antonio, contra la pena de muerte á que fueron sentenciados por el Gefe político de Córdoba, como reos del delito de robo con asalto y heridas.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

Ciudadano Juez de Distrito.

El Promotor fiscal dice: que han promovido estos juicios acumulados, los reos Eusebio Pacheco, Blas Milan, Severo Indalecio, Luz Mereles y Marcelo Antonio, contra la pena de muerte que les impuso la Gefatura política del Canton de Córdoba, por los delitos de robo con asalto y heridas, concurriendo circunstancias agravantes, con violacion de las garantías individuales que les conceden los artículos 14, 16, 23 y 29 de la Constitucion federal, en razon de no haber sido salteadores de camino, único caso en que podia imponérseles dicha pena legalmente.

Tambien manifestaron, que suplicaban al juzgado se sirviera suspender el acto reclamado, y así se decretó por razon de su urgencia y naturaleza.

Y constando de autos que fueron indultados por el Ejecutivo del Estado, fojas 84 de la causa, Luz Mereles y Blas Milan, en virtud de su menor edad, ha quedado sin objeto, respecto de ellos, el presente juicio.

En cuanto á los demas, Eusebio Pacheco, Severo Indalecio y Marcelo Antonio, hay que tener en consideracion: que segun las constancias de la propia causa, los delitos porque han sido juzgados, fueron cometi-

dos en poblado y no en camino ó en despojado que es lo mismo, para los efectos del artículo 23 de la Constitucion, que previene terminantemente, que queda limitada la pena de muerte á los casos que claramente expresa, entre los cuales se enumeran al *salteador de camino*; que para los salteadores y plagiarios no están suspendidas las garantías que otorgan los citados arts. 23 y 29, sino unicamente las que menciona en su artículo 19, la ley de 3 de Mayo del año pasado, ni podian ser suspensas, por que lo prohibe expresamente el referido artículo 29, en razon de que aseguran la vida del hombre: que si bien el artículo 39 de la citada ley, sujeta á la pena á los salteadores sin distincion alguna, es con infraccion del repetido artículo 23, que como ya tiene manifestado, limitó la pena de muerte al salteador de camino y á otros casos, que no son los cometidos por los quejosos; que estos son acreedores sin embargo, á la pena de presidio, que es la que debió habérseles impuesto, por que no emanando el relatado artículo 39 de la ley de 3 de Mayo del año pasado, de la Constitucion federal, siendo así que se opondrá á su artículo 23, los jueces de cada Estado, como lo es en este caso la Gefatura de Córdoba, y todos los demas de la Federacion, Distrito federal y Territorio de la Baja California, deben arreglarse á dicha Constitucion, en todos los negocios y causas en que conozcan, como la Suprema ley de la Union, con preferencia á cualquiera otra que se expidiere en sentido contrario; que así lo ha hecho la Suprema Corte de Justicia en una de sus ejecutorias de 24 de Julio de 1871, pronunciada en un juicio de amparo promovido por tres reos de robo con asalto en una casa situada cerca de un pueblo del Estado de Guadalajara, y se encuentra en el Semanario Judicial, 2ª parte, 2º tomo, pagina 142; que no siendo posible, legalmente hablando, la suspension de las garantías que aseguran la vida del hombre, es evidente que conforme al artículo 23, debe limitarse la pena de